

E

Editorial

Autonomía de los gobiernos regionales

Los gobernadores piden una señal de que el Gobierno está disponible para avanzar en una descentralización más profunda.

Mientras el anuncio de un proyecto de ley para ampliar las condiciones de un aborto cumple el doble objetivo de levantar un debate público que ensombrece otras polémicas de la contingencia -ProCultura y el caso de licencias médicas, los principales-, y revitaliza la adhesión de los grupos más cercanos al programa original de gobierno del Presidente Gabriel Boric, el Ejecutivo avanza en decisiones que maltratan cualquier consideración con sus regiones. Ya no se trata de la virtual paralización de los proyectos de ley que buscan entregar mayores atribuciones a los gobiernos regionales, sino a un segundo recorte de recursos decidido por el Ministerio de Hacienda, para enfrentar el déficit fiscal. Esta nueva rebaja presupuestaria para los proyectos de inversión del Gore alcanza los \$ 3.500 millones, que sumados al primer ajuste de enero completa este año \$ 8.900 millones menos de su erario 2025, algo que afecta el financiamiento de proyectos en materias de salud, seguridad e infraestructura. La señal de fondo es que los gobiernos regionales gozan de una autonomía menor a la de otras unidades del Estado, como los municipios. De allí que la Asociación de Gobiernos Regionales de Chile (Agorechi) pida con urgencia un proyecto de ley que permita a los gores adquirir el mismo estatus de autonomía financiera que tienen las comunas, bajo la condición de que se fortalezcan las unidades de control interno, para evitar que se repita la entrega de recursos a fundaciones que no cumplen con los proyectos presentados. La esperanza de los gobernadores está puesta en la cuenta pública presidencial del 1 de junio, pero, en cualquier escenario, se trataría de un esfuerzo más simbólico que efectivo, un guiño a las ideas originales del programa de Gobierno con pocas probabilidades de materializarse en la actual administración que vive sus últimos diez meses.

La esperanza de los gobernadores está puesta en la cuenta pública presidencial del 1 de junio, pero, en cualquier escenario, se trataría de un esfuerzo más simbólico que efectivo.